



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNÍN

ASOCIACIÓN ESCUELA DE MANEJO  
DE TRANSPORTE Y CARGA EMT  
"REPRESENTADA" POR RICARDO  
ELÍAS AGUILAR BLANCAS

## SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 16 de octubre de 2017

### ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación Escuela de Manejo de Transporte y Carga EMT "representada" por don Ricardo Elías Aguilar Blancas contra la sentencia de fojas 525, de fecha 14 de abril de 2015, expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda.

### FUNDAMENTOS

1. En la sentencia emitida en el Expediente N.º 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional:
  - a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
  - b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional.
  - c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal Constitucional.
  - d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.
2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un recurso carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial urgencia.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNÍN

ASOCIACIÓN ESCUELA DE MANEJO  
DE TRANSPORTE Y CARGA EMTC  
"REPRESENTADA" POR RICARDO  
ELÍAS AGUILAR BLANCAS

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de la sentencia emitida en el Expediente N.º 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de fondo.
4. A juicio de esta Sala del Tribunal Constitucional, no corresponde emitir un pronunciamiento de fondo en la presente causa puesto que don Ricardo Elías Aguilar Blancas no ha acreditado ostentar la representación de la asociación demandante. Aunque ha demostrado ser el vicepresidente del Consejo Directivo de esa persona jurídica (cfr. fojas 133), no puede obviarse que, de acuerdo con su Estatuto, la representación recae, en principio, en el presidente del Consejo Directivo y no en el vicepresidente del mismo (cfr. punto 22, inciso 2 de su Estatuto); empero, este último asumirá tal prerrogativa ante la ausencia del primero y cuando así lo determine el propio Consejo Directivo (cfr. punto 22-A de su Estatuto). Así pues, dado que ni lo uno ni lo otro se constata de autos, don Ricardo Elías Aguilar Blancas no puede ser reputado como representante de la Asociación Escuela de Manejo de Transporte y Carga EMTC.
5. Pese a que lo anteriormente señalado es suficiente para rechazar el recurso de agravio constitucional, esta Sala del Tribunal Constitucional considera que el cuestionamiento de la actora a los nuevos requisitos fijados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para el establecimiento de circuitos de manejo —que se fundan en criterios técnicos—, ni respecto de la necesaria forma en que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías (Sutran) —que es la entidad encargada de fiscalizar a las escuelas de manejo— fiscalizará su cabal cumplimiento; no encuentra respaldo directo en el contenido constitucionalmente protegido de ningún derecho fundamental, tanto es así que la recurrente no ha cumplido con puntualizar, ni siquiera de manera mínima, en qué medida lo denunciado incide en ello.
6. Para esta Sala del Tribunal Constitucional, ni la igualdad ni el debido proceso, en su aspecto sustantivo, se encuentran comprometidos. Lo que se constata, por el contrario, es la impugnación de los nuevos requerimientos decretados discrecionalmente por la Administración para el funcionamiento de su negocio, lo



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNÍN

ASOCIACIÓN ESCUELA DE MANEJO  
DE TRANSPORTE Y CARGA EMTC  
"REPRESENTADA" POR RICARDO  
ELÍAS AGUILAR BLANCAS

que tampoco incide de manera directa en el contenido constitucionalmente tutelado de la libertad de empresa debido a que, en puridad, ni libertad de creación de empresa y de acceso al mercado, ni de autoorganización, ni de competencia, ni para cesar las actividades se encuentran en entredicho bajo esta nueva normativa. Asimismo, en cuanto a la alegada "amenaza" al principio de legalidad, y al subprincipio de taxatividad, garantizados por el artículo 2º, inciso 24, literal d) de la Constitución, ésta no cumple con los requisitos para ser considerada como tal en la medida que no es cierta ni inminente. No es cierta por cuanto de autos no se observa la existencia de actos materiales que indiquen la posibilidad de una amenaza. No es inminente puesto que la publicación de la noticia en la página institucional de SUTRAN sobre la sanción a las escuelas de conductores que incumplan la Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC/15, por sí misma, no implica que se vaya a producir indefectiblemente la cancelación de la autorización en el caso de la recurrente y que ésta vaya a ser arbitraria o lesiva de sus derechos.

7. En todo caso, si bien ese emprendimiento necesariamente requiere del control y supervisión estatal a fin de armonizar el interés público con los intereses de los privados que se dedican a esa actividad lucrativa, lo que supone que su constitucionalidad puede ser sometida a escrutinio constitucional, no puede soslayarse que la conveniencia, utilidad, oportunidad, eficacia y eficiencia de tales actuaciones estatales no son susceptibles de ser controladas por la judicatura constitucional (cfr. sentencia emitida en el Expediente N.º 000018-2003-AI/TC). Por consiguiente, no corresponde emitir un pronunciamiento de fondo en torno a la viabilidad técnica de tales requerimientos que la actora cuestiona. Asimismo, resulta pertinente añadir que si bien la adecuación exigida conlleva que la demandante incurra en gastos, tales erogaciones no resultan, en principio, inconstitucionales.
8. Finalmente, conviene traer a colación lo señalado por la Corte Constitucional Colombiana en la Sentencia C-780/03, en el sentido que "el Estado debe asegurarse que quienes conducen automotores sean personas capacitadas para ello, pues en el ejercicio de esta actividad, que tradicionalmente el Derecho ha considerado como 'peligrosa', se ven implicados caros intereses públicos como lo son la protección general de la vida y la integridad física de la ciudadanía expuesta al riesgo correspondiente". Atendiendo a ello, la intervención estatal rebatida por la demandante se encuentra plenamente legitimada y, como tal, goza de presunción de constitucionalidad.



**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNÍN

ASOCIACIÓN ESCUELA DE MANEJO  
DE TRANSPORTE Y CARGA EMT  
"REPRESENTADA" POR RICARDO  
ELÍAS AGUILAR BLANCAS

9. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 8 *supra*, se verifica que el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente N.º 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, y la participación del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del magistrado Blume Fortini, no resuelta por el voto singular del magistrado Ferrero Costa, y el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera y el fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada que se agregan,

**RESUELVE**

Declarar **IMPROCEDENTE** el recurso de agravio constitucional.

Publíquese y notifíquese.

SS.

**LEDESMA NARVÁEZ  
SARDÓN DE TABOADA  
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA**

Lo que certifico:  
05 MAR. 2018



JANET OTÁROLA SANCILLANA  
Secretaria de la Sala Segunda  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNÍN

ESCUELA DE MANEJO

DETRANSPORTE Y CARTGA EMTG

### FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA

Estoy de acuerdo con el fallo y con la fundamentación de la sentencia interlocutoria emitida en autos, pero me aparto de sus fundamentos 7 y 8 que constituyen un *obiter dicta* irrelevante para resolver la controversia.

Lo que sí es necesario es recordar que, a través de la Resolución Directoral 430-2014-MTC/15 publicada en el diario oficial *El Peruano* el 19 de febrero de 2014, se modificaron los artículos 2 y 3 y el Anexo I de la Resolución Directoral 430-2014-MTC/15, cuya inaplicación solicita la recurrente en el presente caso.

En consecuencia, se ha producido la sustracción de la materia justiciable con relación a dichos extremos de la controversia.

Por tanto, mi voto es por declarar **IMPROCEDENTE**, sin más trámite, el recurso de agravio constitucional de autos en aplicación del acápite b) del fundamento 49 de la sentencia, emitida con calidad de precedente, en el Expediente 00987-2014-PA/TC.

S.

SARDÓN DE TABOADA

Lo que certifico:

05 MAR. 2018



JANET OTÁROLA SANTILLANA  
Secretaria de la Sala Segunda  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNÍN

ASOCIACIÓN ESCUELA DE MANEJO DE  
TRANSPORTE Y CARGA EMTC  
"REPRESENTADA" POR RICARDO ELÍAS  
AGUILAR BLANCAS

### FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas en la presente causa, pero creo necesario añadir las siguientes consideraciones que anoto a continuación.

1. En el presente caso, la demandante solicita la inaplicación de la Resolución Directoral 3634-2013-MTC/15, de fecha 4 de septiembre de 2013, que aprueba las características especiales del circuito de manejo con el que deben de contar las escuelas de conductores. Señala que, por su entrada en vigencia inmediata, dicha norma representa una amenaza cierta e inminente a su derecho al trabajo y a la libertad de empresa. Asimismo, alega que se ha vulnerado su derecho al debido proceso al no contemplarse en la referida norma un procedimiento de verificación de cumplimiento ni una autoridad encargada de realizar tal verificación.
2. Sin embargo, y más allá de las consideraciones expresadas en el proyecto de sentencia, resulta preciso indicar que, mediante Resolución Directoral 430-2014-MTC/15, de fecha 19 de febrero de 2014, se modificó los artículos 2, 3, el primer párrafo del numeral 1 y el numeral 2.1.1 del numeral 2 del Anexo I de la Resolución Directoral 3634-2013-MTC/15.
3. En dicha norma se establece, entre otras cosas, un procedimiento de verificación de las características especiales del circuito de manejo con el que deben de contar las escuelas de conductores. Además, se amplían los plazos de adecuación y se indica que la autoridad encargada de la verificación de la adecuación del circuito de manejo es la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Siendo así, resulta claro que se ha producido una situación de sustracción de la materia, en la medida en que cesaron los hechos que motivaron la interposición de la presente demanda.

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

*Toy Espinosa Saldaña*

Lo que certifico:

05 MAR. 2018



JANET OTÁROLA SANTILLANA  
Secretaria de la Sala Segunda  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNÍN

ASOCIACIÓN ESCUELA DE MANEJO  
DE TRANSPORTE Y CARGA EMT  
"REPRESENTADA" POR RICARDO  
ELÍAS AGUILAR BLANCAS

### VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI

Discrepo, muy respetuosamente, de la decisión contenida en la resolución de mayoría. Considero que si se opta por dictar en el presente proceso una sentencia interlocutoria denegatoria, invocando el precedente vinculante contenido en la Sentencia 00987-2014-PA/TC (conocido como precedente Vásquez Romero) y este fuera aplicable, no corresponde declarar improcedente el recurso de agravio constitucional, sino entrar al fondo del asunto y evaluar la pretensión contenida en la demanda, a los efectos de determinar si la misma se encuentra dentro de los supuestos consagrados en dicho precedente.

Las razones que sustentan mi posición son las siguientes:

#### **Marco constitucional y legal para acceder al Tribunal Constitucional como última y definitiva instancia constitucional en la jurisdicción nacional**

1. La Constitución Política del Perú ha consagrado, en el inciso 2) de su artículo 202, que el Tribunal Constitucional conoce, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias dictadas por el Poder Judicial en los procesos de *habeas corpus*, amparo, *habeas data* y cumplimiento; habilitando de tal forma al demandante a acceder al máximo órgano de la justicia constitucional, sin más condición que este se halle ante una resolución denegatoria de segundo grado.
2. Complementando tal propósito habilitador de acceso al Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional en su artículo 18 reguló el recurso de agravio constitucional a favor del demandante, como el instrumento procedimental idóneo para impugnar la resolución denegatoria a su pretensión dictada en segundo grado por el Poder Judicial, sea que este haya declarado improcedente la demanda o que haya declarado infundada la demanda, sin más requisito para su concesión y procedencia que se trate de una resolución denegatoria y que se interponga dentro del plazo de diez días de notificada.
3. Ratificando esa línea habilitadora de acceso al Tribunal Constitucional, el mismo código adjetivo constitucional introdujo en su artículo 19 el recurso de queja por denegatoria de recurso de agravio constitucional, el cual permite al demandante cuestionar ante el propio Tribunal Constitucional aquella resolución dictada por el Poder Judicial que haya denegado o rechazado tal medio impugnatorio, a fin que el Tribunal Constitucional haga una revisión de la declaración de improcedencia cuestionada, en la línea de brindar una mayor garantía al justiciable y, eventualmente, rectificar la decisión a favor del demandante, si se detecta que la denegatoria careció de fundamento.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNÍN

ASOCIACIÓN ESCUELA DE MANEJO  
DE TRANSPORTE Y CARGA EMTC  
"REPRESENTADA" POR RICARDO  
ELÍAS AGUILAR BLANCAS

4. Por tanto, dentro de la lógica de la justicia finalista, amparista y antiformalista que informa el acceso al Tribunal Constitucional, así como las instituciones procesales reguladas por el Código Procesal Constitucional, no cabe establecer requisitos de procedencia adicionales a los dos señalados y, menos aún, sostener que al Tribunal Constitucional le compete determinar la procedencia del recurso de agravio constitucional, salvo el caso de su intervención residual vía queja por denegatoria del mismo para procurar su concesión.
5. Es decir, la concesión y, por tanto la calificación de la procedencia del recurso de agravio constitucional, es una competencia del Poder Judicial, ejercida a través de las Salas de sus Cortes Superiores encargadas de conocer en segundo grado los procesos que nos ocupan, cuando hayan dictado resoluciones denegatorias a la pretensión del demandante, por ser improcedente o infundada la demanda, según el caso, que permite acceder al Tribunal Constitucional, a los efectos que, como última y definitiva instancia (como instancia de grado) defina la controversia.
6. Por tanto, una vez abierta la puerta de acceso al Tribunal Constitucional vía la concesión del recurso de agravio constitucional, lo cual significa acceder a una instancia de grado, que, además, es última y definitiva en la jurisdicción nacional, no cabe que el Tribunal Constitucional califique la procedencia o improcedencia del citado recurso, por cuanto aquél viene ya calificado y concedido por la segunda instancia judicial; el Tribunal Constitucional no tiene competencia para entrar a dicha calificación y, si lo hiciera, estaría volviendo a calificar en perjuicio del justiciable demandante un recurso ya calificado y concedido; a contracorriente de la lógica finalista, amparista y antiformalista antes referida, y violando su derecho de acceso a la justicia constitucional especializada en instancia final y definitiva en la jurisdicción interna. Más aún, si la expedición de la sentencia interlocutoria denegatoria se produce sin vista de la causa.

**Descargar sin desamparar, desgarnecer ni abdicar. La correcta interpretación del precedente Vásquez Romero**

7. En armonía con lo dicho hasta aquí, cualquier intento de descarga que asuma el Tribunal Constitucional si observa que existen causas manifiestamente improcedentes o infundadas, que debieron merecer una descalificación desde un inicio, por no darse los supuestos elementales que habilitan la generación de un proceso constitucional, no pasa por descalificar el recurso de agravio constitucional ya concedido, sino por emitir un pronunciamiento desestimatorio, que indique con toda precisión la razón que lleva a tal decisión; máxime si los supuestos a los que se refiere el fundamento 49 de la Sentencia 0987-2014-PA/TC, no son, dentro del contexto descrito, instrumentos de rechazo de plano del



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNÍN

ASOCIACIÓN ESCUELA DE MANEJO  
DE TRANSPORTE Y CARGA EMT  
"REPRESENTADA" POR RICARDO  
ELÍAS AGUILAR BLANCAS

recurso de agravio constitucional, que, como tales, justifiquen su improcedencia, sino situaciones que, de presentarse, originan una sentencia interlocutoria denegatoria por carecer de sustento la pretensión contenida en la demanda, lo cual implica necesariamente entrar al examen del fondo del asunto.

8. Además, cualquier intento de descarga procesal no debe olvidar que cada caso es peculiar y merece un análisis propio, prolijo y detenido, para arribar a una decisión debidamente motivada y justa, ajena a facilismos y apresuramientos. Es una exigencia de cumplimiento ineludible en la excelsa función de administrar la justicia constitucional que tiene el Tribunal Constitucional, como garante final de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y de la primacía normativa de la Constitución, y como última y definitiva instancia en los procesos de la llamada jurisdicción de la libertad. Lo contrario colisiona con el principio de interdicción de la arbitrariedad.
9. Por lo demás, considero pertinente precisar que las causales de rechazo que contempla el precedente contenido en la Sentencia 00987-2014-PA/TC\* solo deben ser entendidas con un criterio eminentemente restrictivo. Esto es, como referidas única y exclusivamente a los cuatro supuestos que allí se consignan y siempre que aparezcan en forma indiscutible e indubitable. No así con un criterio de aplicación extensiva y, menos aún, a otros supuestos de desestimación de la pretensión.

#### **El exceso incurrido y mi apartamiento de la forma de aplicación y extensión del precedente Vásquez Romero**

10. En este contexto, resulta un notable exceso pretender, como ya viene ocurriendo en una buena cantidad de casos, que la totalidad de causales de improcedencia de los procesos constitucionales previstas en el Código Procesal Constitucional (cCfr. artículos 4, 5 y 70, entre otros), sean subsumidas dentro de los supuestos establecidos en el citado precedente, pues este último, lo enfatizo, fue concebido para casos muy excepcionales en los que no hubiese duda alguna sobre su encuadramiento en tales supuestos: para casos de notoria, indudable y grotesca improcedencia, que habilitaban la desestimación de la pretensión sin más trámite, de manera excepcional. No fue concebido con una finalidad laxa, amplia y genérica, ni habilitadora de otras situaciones; máxime si la decisión se emitiría sin

---

\* Carencia de fundamentación en la vulneración que se invoque, ausencia de trascendencia constitucional en la cuestión de derecho planteada, contradicción a un precedente vinculante emanado del Tribunal Constitucional y existencia de casos desestimatorios sustancialmente iguales.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNÍN

ASOCIACIÓN ESCUELA DE MANEJO  
DE TRANSPORTE Y CARGA EMT  
"REPRESENTADA" POR RICARDO  
ELÍAS AGUILAR BLANCAS

más trámite. Se trató de una figura de aplicación excepcional. No de aplicación general. Y, lo aclaro, ese fue el motivo por el que acompañé la propuesta, que lamentablemente viene siendo desnaturalizada, como lo he explicado precedentemente.

11. Las consideraciones descritas me llevan a sostener que, adicionalmente a mi discrepancia por el uso equivocado que se viene haciendo de la llamada sentencia interlocutoria denegatoria, tampoco puedo asumir como razonable y conforme a Derecho su aplicación indiscriminada, extensiva y generalizada a toda causal de improcedencia o de rechazo contemplada en el Código Procesal Constitucional, omitiendo el trámite de vista de la causa y sin oír a las partes. Ello lesiona el derecho de defensa, el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela procesal efectiva, entre otros, que están reconocidos en el artículo 139, incisos 14, 3 y 3 de la Constitución, respectivamente, en los artículos 1 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 4 del mismo Código Procesal Constitucional; derechos que el Tribunal Constitucional ha desarrollado con amplitud en numerosas sentencias dictadas antes del precedente Vásquez Romero, como el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y sus parámetros de medición.
12. Frente a estas dos situaciones, la desnaturalización de la aplicación del precedente Vásquez Romero y su indebida extensión a todas las causales de improcedencia previstas en el Código Procesal Constitucional, he llegado a la firme convicción que debo dejar constancia de mi apartamiento de tales formas de entender y aplicar dicho precedente.

### El sentido de mi voto

Voto a favor de que el Tribunal Constitucional dé trámite regular a la causa, convoque a audiencia para la vista de la misma, oiga a las partes en caso soliciten informar y admita nuevas pruebas si estas se presentan, así como conozca y amerite las argumentaciones que esgriman en defensa de sus derechos, en un marco de respeto irrestricto a su derecho de defensa, como última y definitiva instancia que agota la jurisdicción interna, dejando aclarado que al no haberse emitido pronunciamiento sobre la pretensión, no puedo opinar por ahora sobre el fondo de la controversia, ya que la resolución de mayoría, lesionando los antes aludidos derechos de la parte demandante, se limita a declarar improcedente el recurso de agravio constitucional.

S.

BLUME FORTINI

Lo que certifico:  
05 MAR. 2018

JANET OTÁROLA SANTILLANA  
Secretaria de la Sala Segunda  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNIN

ASOCIACION DE ESCUELA DE MANEJO  
DE TRANSPORTE Y CARGA EMTC  
Representado(a) por RICARDO ELIAS  
AGUILAR BLANCAS - APODERADO

### VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

El magistrado que suscribe el presente voto ha sido llamado para resolver la discordia surgida entre los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional.

Se advierte que para resolver el presente caso debe determinarse si corresponde declarar improcedente el recurso de agravio constitucional, como sostienen en su voto concurrente los magistrados Ledesma Narváez y Sardón de Taboada, o si, por el contrario, debe darse trámite regular a la causa y convocarse a audiencia de vista, lo que permitiría oír los argumentos de las partes que soliciten informar, admitir, de ser el caso, nuevas pruebas, así como conocer y evaluar las argumentaciones que se aleguen, toda vez que el Tribunal Constitucional constituye última y definitiva instancia que agota la jurisdicción interna, debiendo emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

De la evaluación de los criterios anteriores, emito mi voto por las siguientes razones que a continuación expongo.

#### EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO CORTE DE REVISIÓN O FALLO Y NO DE CASACIÓN

1. La Constitución de 1979 creó el Tribunal de Garantías Constitucionales como instancia de casación y la Constitución de 1993 convirtió al Tribunal Constitucional en instancia de fallo. Por primera vez en nuestra historia constitucional una carta de derechos dispuso la creación de un órgano *ad hoc*, independiente del Poder Judicial, con la tarea de garantizar la supremacía constitucional y la vigencia plena de los derechos fundamentales.
2. La Ley Fundamental de 1979 estableció que el Tribunal de Garantías Constitucionales era un órgano de control de la Constitución que tenía jurisdicción en todo el territorio nacional para conocer en materia de *habeas corpus* y amparo las causas denegadas por el Poder Judicial *en vía de casación*, lo que implicó que dicho Tribunal no constituía una cuarta instancia habilitada para fallar en forma definitiva sobre la causa. Es decir, no se pronunciaba sobre los hechos invocados como amenaza o lesión a los derechos reconocidos en ella.
3. En ese sentido, la Ley 23385, Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, vigente en ese momento, estableció en sus artículos 42 al 46 que dicho órgano, al encontrar una resolución denegatoria que ha violado la ley o la ha aplicado en forma errada o ha incurrido en graves vicios procesales en la tramitación y resolución de la acción, procederá a casar la sentencia y, luego de señalar la deficiencia, devolverá los actuados a la Corte Suprema de Justicia de la República (reenvío) para que emita nuevo fallo siguiendo sus lineamientos,



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNIN

ASOCIACION DE ESCUELA DE MANEJO  
DE TRANSPORTE Y CARGA EMTC  
Representado(a) por RICARDO ELIAS  
AGUILAR BLANCAS - APODERADO

- procedimiento que, a todas luces, dilatava en exceso las acciones de garantías mencionadas.
4. El modelo de tutela ante amenazas y vulneración de derechos ha sido seriamente modificado en la Constitución de 1993. En primer lugar, se amplían los mecanismos de tutela de dos a cuatro, a saber, *habeas corpus*, amparo, *habeas data* y acción de cumplimiento. En segundo lugar, se crea al Tribunal Constitucional como órgano de control de la constitucionalidad, aun cuando la Constitución lo califica erróneamente como "órgano de control de la Constitución". No obstante, en materia de procesos constitucionales de la libertad, la Constitución establece que el Tribunal Constitucional es instancia de revisión o fallo.
  5. Cabe señalar que la Constitución Política del Perú, en su artículo 202, inciso 2, prescribe que corresponde al Tribunal Constitucional "*conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias dictadas en los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento*". Esta disposición constitucional, desde una posición de franca tutela de los derechos fundamentales, exige que el Tribunal Constitucional escuche y evalúe los alegatos de quien se estima amenazado o agraviado en un derecho fundamental. Una lectura diversa contravendría mandatos esenciales de la Constitución, como son el principio de defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado y "*la observancia del debido proceso y tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto cualquiera sea su denominación*" consagrado en el artículo 139, inciso 3.
  6. Como se advierte, a diferencia de lo que acontece en otros países, en los cuales el acceso a la última instancia constitucional tiene lugar por la vía del *certiorari* (Suprema Corte de los Estados Unidos), en el Perú el Poder Constituyente optó por un órgano supremo de interpretación de la Constitución capaz de ingresar al fondo en los llamados procesos de la libertad cuando el agraviado no haya obtenido una protección de su derecho en sede del Poder Judicial. En otras palabras, si lo que está en discusión es la supuesta amenaza o lesión de un derecho fundamental, se debe abrir la vía correspondiente para que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse. Pero la apertura de esta vía solo se produce si se permite al peticionante colaborar con los jueces constitucionales mediante un pormenorizado análisis de lo que se pretende, de lo que se invoca.
  7. Lo constitucional impone escuchar a la parte como concretización de su derecho irrenunciable a la defensa; además, un Tribunal Constitucional constituye el más alto modelo de aplicación correcta del derecho, el más efectivo medio de defensa de



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNIN

ASOCIACION DE ESCUELA DE MANEJO  
DE TRANSPORTE Y CARGA EMTC  
Representado(a) por RICARDO ELIAS  
AGUILAR BLANCAS - APODERADO

los derechos fundamentales frente a los poderes públicos y privados, lo cual evidencia el triunfo de la justicia frente a la arbitrariedad.

**EL DERECHO A SER OÍDO COMO MANIFESTACIÓN DE LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES DE LA LIBERTAD**

8. La administración de justicia constitucional de la libertad que brinda el Tribunal Constitucional, desde su creación, es respetuosa, como corresponde, del derecho de defensa inherente a toda persona, cuya manifestación primaria es el derecho a ser oído con todas las debidas garantías al interior de cualquier proceso en el cual se determinen sus derechos, intereses y obligaciones.
9. Precisamente, mi alejamiento respecto a la emisión de una resolución constitucional sin realizarse audiencia de vista está relacionado con la defensa, la cual, sólo es efectiva cuando el justiciable y sus abogados pueden exponer, de manera escrita y oral, los argumentos pertinentes, concretándose el principio de inmediación que debe regir en todo proceso constitucional.
10. Sobre la intervención de las partes, corresponde señalar que, en tanto que la potestad de administrar justicia constituye una manifestación del poder que el Estado ostenta sobre las personas, su ejercicio resulta constitucional cuando se brinda con estricto respeto de los derechos inherentes a todo ser humano, lo que incluye el derecho a ser oído con las debidas garantías.
11. Cabe añadir que la participación directa de las partes, en defensa de sus intereses, que se concede en la audiencia de vista, también constituye un elemento que democratiza el proceso. De lo contrario, se decidiría sobre la esfera de interés de una persona sin permitirle alegar lo correspondiente a su favor, lo que resultaría excluyente y antidemocrático. Además, el Tribunal Constitucional tiene el deber ineludible de optimizar, en cada caso concreto, las razones, los motivos y los argumentos que justifican sus decisiones, porque el Tribunal Constitucional se legitima no por ser un tribunal de justicia, sino por la justicia de sus razones, por expresar de modo suficiente las razones de derecho y de hecho relevantes en cada caso que resuelve.
12. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho de defensa *"obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no*



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNIN

ASOCIACION DE ESCUELA DE MANEJO  
DE TRANSPORTE Y CARGA EMTC  
Representado(a) por RICARDO ELIAS  
AGUILAR BLANCAS - APODERADO

*simplemente como objeto del mismo*<sup>1</sup>, y que *"para que exista debido proceso legal es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables"*<sup>2</sup>.

#### NATURALEZA PROCESAL DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL

13. El modelo de "instancia de fallo" plasmado en la Constitución no puede ser desvirtuado por el Tribunal Constitucional si no es con grave violación de sus disposiciones. Por ello, si bien es el intérprete supremo, no es su reformador, toda vez que como órgano constituido también está sometido a la Constitución.
14. Cuando se aplica a un proceso constitucional de la libertad la denominada "sentencia interlocutoria", el recurso de agravio constitucional (RAC) pierde su verdadera esencia jurídica, ya que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para "revisar" ni mucho menos "recalificar" el recurso de agravio constitucional.
15. De conformidad con los artículos 18 y 20 del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional no "concede" el recurso. Esta es una competencia de la Sala Superior del Poder Judicial. Al Tribunal lo que le corresponde es conocer del RAC y pronunciarse sobre el fondo. Por ende, no le ha sido dada la competencia de rechazar dicho recurso, sino por el contrario de "conocer" lo que la parte alega como un agravio que le causa indefensión.
16. Por otro lado, la "sentencia interlocutoria" establece como supuestos para su aplicación fórmulas imprecisas y amplias cuyo contenido, en el mejor de los casos, requiere ser aclarado, justificado y concretado en supuestos específicos, a saber, identificar en qué casos se aplicaría. No hacerlo, no definirlo, ni justificarlo convierte el empleo de la precitada sentencia en arbitrario, toda vez que se podría afectar, entre otros, el derecho fundamental de defensa, en su manifestación de ser oído con las debidas garantías, pues ello daría lugar a decisiones subjetivas y carentes de predictibilidad, afectando notablemente a los justiciables, quienes tendrían que adivinar qué resolverá el Tribunal Constitucional antes de presentar su respectiva demanda.
17. Por lo demás, *mutatis mutandis* el precedente vinculante contenido en la STC 0987-2014-PA/TC repite lo señalado por el Tribunal Constitucional en otros fallos, como

---

<sup>1</sup> Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009, párrafo 29.

<sup>2</sup> Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de junio de 2002, párrafo 146.



**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**



EXP. N.º 03895-2015-PA/TC

JUNIN

ASOCIACION DE ESCUELA DE MANEJO  
DE TRANSPORTE Y CARGA EMTC  
Representado(a) por RICARDO ELIAS  
AGUILAR BLANCAS - APODERADO

en el caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez (STC 02877-2005-PHC/TC). Del mismo modo, constituye una reafirmación de la naturaleza procesal de los procesos constitucionales de la libertad (supletoriedad, vía previa, vías paralelas, litispendencia, invocación del derecho constitucional líquido y cierto, etc.).

18. Sin embargo, el hecho de que los procesos constitucionales de la libertad sean de una naturaleza procesal distinta a la de los procesos ordinarios no constituye un motivo para que se pueda desvirtuar la esencia principal del recurso de agravio constitucional.
19. Por tanto, si se tiene en cuenta que la justicia en sede constitucional representa la última posibilidad para proteger y reparar los derechos fundamentales de los agraviados, voto a favor de que en el presente caso se convoque a audiencia para la vista, lo que garantiza que el Tribunal Constitucional, en tanto instancia última y definitiva, sea la instancia adecuada para poder escuchar a las personas más vulnerables, afectadas en sus derechos esenciales cuando no encuentran justicia en el Poder Judicial, especialmente cuando agotada la vía constitucional, al justiciable solo le queda el camino de la jurisdicción internacional de protección de derechos humanos.
20. Como afirmó Raúl Ferrero Rebagliati, "la defensa del derecho de uno es, al mismo tiempo, una defensa total de la Constitución, pues si toda garantía constitucional entraña el acceso a la prestación jurisdiccional, cada cual al defender su derecho está defendiendo el de los demás y el de la comunidad que resulta oprimida o envilecida sin la protección judicial auténtica".

S.

FERRERO COSTA

**Lo que certifico:**

**05 MAR. 2018**



JANET OTÁROLA SANTILLANA  
Secretaría de la Sala Segunda  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL